

1. Contamos en España con tres formas de protección de las arquitecturas que se consideran patrimoniales.

La primera y la más antigua es la protección de los Monumentos y los Conjuntos, iniciada en el siglo XIX, pero legislada con coherencia sólo a partir de la Ley del Patrimonio Histórico Artístico de 1933, esto es, en la etapa republicana que la rebelión franquista liquidó, y en buena medida inspirada por el profesor arquitecto Leopoldo Torres Balbás, catedrático de Historia de la Arquitectura de nuestra Escuela, y figura bien conocida.

Entonces se habían identificado los “Monumentos” y los “Conjuntos”, esto es, bienes patrimoniales de los que se tenía una consideración histórica, de un lado, y artística, de otro. Se trataba, pues, de identificar, para proteger y conservar y, eventualmente, restaurar, los bienes arquitectónicos ya históricos —esto es, del pasado— y que pudieran considerarse como dotados de un valor artístico. No se consideraban los modernos —se pensaba que tan sólo el tiempo podía ser el garante de la identificación y, así, de la protección— y tampoco se consideraban del todo aquellos bienes que pudieran entenderse tan sólo como históricos o antropológicos; esto es, sin que pudiera reconocerse en ellos el carácter artístico. Se protegía así, pues, el arte histórico arquitectónico.

Durante la dictadura franquista (y pienso que debido probablemente al especial sentido de la economía mental que caracterizaba al siniestro usurpador) se conservó esta legislación republicana, si bien su sentido, interpretado por las distintas autoridades técnicas y políticas que se fueron sucediendo, fue cambiando con el tiempo. Lo suficiente, al menos, para que ya en la democracia plena, se hiciera una nueva ley, la de 1985, llamada la Ley del Patrimonio Histórico Español, inspirada sobre todo por el ilustre arqueólogo y catedrático, el profesor Manuel Fernández Miranda, entonces Director General de Bellas Artes y prematuramente desaparecido. Debo recordar que entre sus múltiples asesores estuvimos los arquitectos Dionisio Hernández Gil, Carlos Baztán, y yo mismo, pues entonces trabajábamos todos en la Dirección General, así como Manuel de las Casas, que poco antes había trabajado también en ella.

Esta Ley es distinta de la de 1933, y ya desde el propio título, “Patrimonio histórico”, así se advierte. Se elimina la referencia a lo “artístico”, término considerado ya muy ambiguo, y se pasa así a una deriva definitivamente arqueológica. La ascensión de los arqueólogos y de sus ideas era ya bien conocida por los arquitectos que trabajaban en restauración, y en la Ley de 1985 se convirtió en un hecho oficial. El patrimonio se transformó en histórico, solamente, y los “Monumentos” y “Conjuntos” se convirtieron en “Bienes de Interés Cultural”. Lo “cultural” vino a ser, pues, el valor que pretende aunar, bajo la protección de lo histórico como concepto principal, lo arqueológico, lo artístico, lo etnográfico, etc., etc.

El patrimonio oficial sigue siendo, pues, histórico, pero ahora exclusivamente. Esto es, no es moderno, si bien la costumbre había hecho ya que se fueran protegiendo, con alguna frecuencia, bienes que se consideraban ya históricos aunque también pudieran entenderse

todavía como contemporáneos. La declaración de la Ciudad Universitaria de Madrid, hecha con la Ley recién salida y muy poco antes de ser traspasadas las competencias a las entonces recientes Comunidades Autónomas, puede verse como un ejemplo.

El Ministro Solana hizo coincidir la Ley nueva con la liquidación del centralismo de Bellas Artes al celebrarse los traspasos a las Comunidades. Lo que se llamaba “Español” en la Ley pasó a ser también regional, o bien de las llamadas nacionalidades. Estas regiones y nacionalidades hicieron también sus leyes, no sé si innecesarias o no, pero sobre todo iniciaron una política autónoma, y, por lo tanto, distinta. Sé, por ejemplo, que Andalucía apuró el concepto de histórico declarando muchas arquitecturas modernas como BIC, y que Asturias hizo algo más ecléctico, pero no tengo una información completa, e ignoro también si alguien se ha molestado en reunirla. En Madrid, por ejemplo, algunas arquitecturas modernas de los años 30, que habían sido incoadas todavía desde la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, normalmente por iniciativa de la arquitecta Amparo Berlinches, que continuó haciéndolo después desde la propia Comunidad de Madrid, aún no han sido declarados definitivamente. Esto es, después de más de 25 años. En Madrid, la Comunidad, al menos en la última década, parece pues carecer por completo de ninguna política de protección o de identificación. Como carece de tantas otras cosas, a pesar de los grandes éxitos electorales que acompañan a su peculiar gestión.

Pero lo realmente más cierto es que la política ha dejado de ser estatal. No sé si el patrimonio ha dejado o no de ser “Español”, como la Ley, algo ingenuamente, dice todavía. Sin echar en absoluto de menos el centralismo -pues creo firmemente que era un mal; que era algo de pésimo funcionamiento, funcionamiento que yo conocí muy directamente- resulta sin embargo completamente cierto que no hay ahora una política oficial unificada, pues, que yo sepa, las Comunidades no han coordinado nunca nada al respecto. No obstante, he de advertir que yo no tiendo a pensar que esta falta de unidad sea un mal. Es simplemente así. Tampoco hay unidad entre las protecciones de este tipo en la Unión Europea, por ejemplo.

Anotemos, pues, que la política oficial y tradicional de identificación y protección del patrimonio arquitectónico es ahora diversificada y regionalizada, por lo que ya no es unitaria. Así, pues, la identificación de los bienes históricos tampoco lo es, y depende directamente de la política y de sus protagonistas concretos en cada región o nacionalidad.

2. La segunda protección, tanto en relación al tiempo como en importancia, que se ha dado en España nació como algo municipal y está ligada al urbanismo y a la edificación.

Puede decirse que fue pionero —o uno de los importantes pioneros, al menos— el Plan Especial de Protección de los edificios de la ciudad de Madrid, de 1973, promovido y realizado por el arquitecto Juan López Jaén. Este Plan estaba dirigido a preservar los edificios que se consideraban de valor y de cualquiera que fuese la época en la ciudad de Madrid hasta la guerra civil, y en su territorio municipal, para evitar con ello su derribo o su transformación no cualificada.

A partir de iniciativas como ésta fue común que los Planes Generales de Ordenación Urbana españoles contuvieran un catálogo de edificios protegidos. Esto suponía una identificación nueva, pues el valor no era ya tanto, o sólo, histórico, como patrimonial, ahora desde el punto de vista local, lo que equivale a decir urbano. El patrimonio pasaba a ser un valor ligado a la ciudad, incluso a la calidad de la escena urbana. La arquitectura podía ser antigua o moderna, si bien puede reconocerse una especial debilidad por la identificación y protección de la arquitectura ecléctica e historicista, probablemente porque fuera la que añadía más indudables valores ambientales, y así podía ser señalada como tal ante concejales y ciudadanos. Bastaba, pues, la presencia de molduras, órdenes y decoración historicista para que los edificios fueran protegidos, aunque es preciso decir, en honor a la verdad, que muchos ejemplos de la arquitectura moderna también lo fueron.

Al ser los planes municipales, la dispersión de criterio fue mayor, todavía, que con las regiones, si bien unificada de algún modo por una educación de los técnicos urbanistas en buena medida común o similar –la educación de nuestras Escuelas-. En todo caso, tampoco creo que la posible dispersión de criterios, ahora local, deba de tenerse por algo negativo.

La consideración del patrimonio local como algo urbano, de un lado, y como algo inevitablemente sometido a la economía y al sentido práctico, de otro, ha hecho que se produzca una sobrevaloración de la imagen urbana de los edificios que se identifican y protegen. Esto es, que en ellos lo que más vale es la fachada, identidad primordial que se protege para lograr que se conserve al menos dicha escena urbana. Muchos edificios se han conservado así tan sólo en apariencia, estando nuestras ciudades, por ello y en buena medida, enmascaradas, si bien, y como en el carnaval, la triste verdad pueda verse a través de los huecos. La conservación de la edificación de las ciudades ha sido y está siendo sobre todo una conservación de las fachadas, de las imágenes.

Con un enorme miedo a la construcción de nueva planta; o, dicho de otro modo, con la incapacidad de dotarse de los instrumentos necesarios para que arquitectos y arquitecturas convenientes y nuevas ocuparan su lugar normal en la ciudad, los ayuntamientos han hecho que algunas paredes de composiciones mediocres hayan sobrevivido artificiosamente al modo de cadáveres solo relativamente exquisitos. Creo que esta protección parcial, esta identificación precaria, ha sido uno de los males más genéricos y abundantes de la salvaguarda municipal y urbanística del patrimonio, que ha hecho que en determinada medida esta protección haya sido una falsedad.

Adelanto que la clasificación en bienes de distinta categoría y con distintas posibilidades de actuación que los catálogos municipales y urbanísticos han consagrado y hecho moneda corriente me parece una equivocación bastante completa.

3. En tercer lugar deberíamos hablar de la identificación y protección de la arquitectura moderna, institucionalmente promovida por el llamado DOCOMOMO, que no es de carácter oficial, pero que en España y Portugal se ha apoyado sobre todo en los Colegios de Arquitectos, tanto por su carácter representativo y público como por la fortaleza y la solvencia económica de éstos, si bien esto último no puede asegurarse ya para el futuro.

En este caso lo que se estudia y protege son los edificios del “Movimiento Moderno”, denominación que plantea algunas imprecisiones, o algunas dudas, en cuanto a la identidad.

De un lado, parece esta denominación algo con carácter histórico. Se defiende y protege lo que fue el “Movimiento Moderno”, que, al haberse convertido en histórico, se ha hecho merecedor de protección. Si esto fuera así, la defensa del DOCOMOMO no sería otra que una ampliación de las protecciones tradicionales de los monumentos históricos. Se estaría reivindicando que los edificios del Movimiento Moderno tienen ya la condición de tales. Esto, de algún modo es así, de hecho, y creo que efectivamente conviene que sea así. Es necesario proclamar que las mejores arquitecturas modernas de los dos primeros tercios del siglo XX, pongamos por caso, son ya monumentos convencionales. O, dicho de manera más moderna, son ya BIC, Bienes de Interés Cultural, esto es de interés para toda la sociedad. Esta reivindicación es importante, y pienso por ello que quizá sería interesante que DOCOMOMO solicitara en países como España la declaración sistemática de monumentos modernos.

Esta cuestión, sin embargo, dejaría pendiente otra, y es la de cuando se considera que los edificios son ya históricos. O, dicho de otra manera, cómo y cuando se valora lo más reciente.

DOCOMOMO, sin embargo, no ha abandonado, y no debería abandonar, la vieja y doble condición de “histórico” y “artístico”, que podemos modernizar como “Histórico” y “cualificado”. Si una visión más arqueologista, quizá acertada, ha suprimido lo histórico-artístico para quedarse sólo con lo histórico, con la arquitectura moderna no podemos hacerlo. Proteger lo que puede considerarse histórico no es suficiente, pues ha de protegerse también lo que se considera simplemente cualificado. Incluso lo cualificado es más importante, ya que no parece claro que todos los edificios modernos, si ya son viejos, sean por eso, y como históricos, protegidos. En todo caso es ésta una cuestión bastante importante de discutir y aclarar. ¿Todo lo “histórico” ha de ser protegido? Pensar en lo que es más o menos cualificado ¿es una ambigüedad indeseable, que ha de ser eliminada? ¿Podemos prescindir del juicio sobre la calidad?

Pero, además, una cierta ambigüedad del DOCOMOMO es su referencia concreta al “Movimiento Moderno”, en vez de a la arquitectura del siglo XX, lo que podría establecer, en principio, algunos equívocos. ¿Quiere esto decir que lo que no consideremos estrictamente “Moderno” no se considera tampoco digno de protección? Ciertamente es que la ambigüedad no es muy importante ya que no alcanza a muchas cosas. El historicismo del siglo XX (Palacios, Aníbal González, Moya, etc.) se protege por sí solo, pues es convencionalmente muy estimado. El post-moderno no dio muy buenos frutos, así que no nos debe preocupar demasiado. No obstante, conviene advertir este equívoco, y pensar, en torno a él, que no se puede discriminar en el patrimonio reciente, y que tampoco es muy sana desde el punto de vista intelectual la tendencia, demasiado primitiva ya, de mitificar lo que podemos considerar como “arquitectura moderna”, como si estuviéramos todavía en los momentos de lucha contra el academicismo, tan lejos ya. Ello nos vuelve a llevar a la necesidad de los dos criterios normales, el histórico y el de calidad, y tal parece que de este último no podemos prescindir. Debemos proteger lo que es un testimonio de la historia y lo que tiene una calidad arquitectónica que podemos reconocer. A mi entender, ambas cosas. Y si “moderno” significa una distinción estilística, entonces resulta inadmisibles como identificación y como protección. Debemos pedir la

protección de toda la arquitectura contemporánea cualificada, pueda ésta entenderse o no como moderna en términos conceptuales y estilísticos.

4. Pero es preciso observar que de estas tres protecciones, las únicas eficaces son las dos primeras, ya que se convierten en leyes obligatorias para los municipios. Los inventarios, por importantes que sean, como lo es el del DOCOMOMO, no son eficaces a efectos de protección.

En Madrid, por ejemplo, como el Plan Especial de 1973 no iba más allá de la etapa de la guerra civil, los edificios posteriores quedaron indefensos por más que fueran absolutamente conocidos y valorados. El propio Ayuntamiento, siendo Alcalde Álvarez del Manzano, derribó la 1ª Feria del Campo, de Francisco Cabrero y Jaime Ruiz, que era de su propiedad, y lo hizo sin que nadie se diera cuenta de ello. A propietarios particulares se les permitió derribar edificios magníficos, como la Fábrica Monky, de Alas y Casariego, o la casa unifamiliar de la calle del Doctor Arce, de De la Sota. A un organismo oficial se le permitió que unos arquitectos rehabilitaran completamente el edificio del Diario Pueblo, de Aburto, destruyéndolo en realidad. Sin duda hay muchos más casos y, de hecho, hay estudios sobre ello.

Cuando en los años 90 se incluyó un nuevo inventario en el Plan General dirigido por Rodríguez Avial, se volvió a producir una protección eficaz de los edificios considerados y hasta esos años. Pero a partir de esta protección lo que ocurre es que los edificios que no han entrado en ella quedan absolutamente desprotegidos, tanto da que figuren en libros, catálogos o inventarios. Si un Plan General tiene catálogo de edificios protegidos, los demás se consideran por completo susceptibles de derribo. Se convierte incluso en un derecho del propietario. Es decir, que cada lista que se protege oficialmente condena a todo lo que no está en ella, pase lo que pase. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con el edificio de Fisac llamado “La Pagoda”; estaba fuera de protección y se derribó a pesar de las grandes protestas que se produjeron, siendo Alcalde Ruiz Gallardón.

Con las protecciones urbanísticas ocurre además que es inevitable que la corporación admita una cantidad determinada de edificios a proteger, y no más. Los edificios que son así considerados como no tan cualificados, y que, aunque sean estimables, se quedan fuera, quedan condenados, como hemos dicho, pues pasan a tener mucha menos protección que si no estuviera protegido ninguno de los otros.

Pero, ¿los problemas de la calidad de los edificios para merecer protección, de un lado, y los de la cantidad que pueda limitar el municipio, de otro, son evitables? Tal parece que no. Tiendo a pensar que resulta inevitable discriminar para hacer un catálogo y resulta imposible exigir a los políticos mayor protección de la que estén dispuestos a admitir. Pues, en realidad, la razón la tienen ellos, que representan a la sociedad. Nosotros, como profesionales y amantes de la arquitectura, no nos representamos más que a nosotros mismos. No podemos hacer una religión de la protección patrimonial, como parecen hacer algunos, ni siquiera podemos recuperar el despotismo ilustrado, todavía vigente en buena medida en los tiempos de la 2ª República y de la Ley de 1933.

5. No podremos, pues, a mi entender, evitar los riesgos que supone juzgar la calidad, ni rechazar las limitaciones impuestas por los políticos.

Sí deberíamos rechazar, sin embargo, algunas prácticas perversas muy corrientes. Está entre ellas la ya citada clasificación del bien como “integral”, “estructural”, “ambiental”, etc., haciendo que estas calificaciones sirvan de guía para las obras que puedan hacerse en los edificios. La práctica de estas cosas ha sido negativa, como es el de la protección exclusiva de las fachadas, también citada, y algunas cuestiones más.

Las clasificaciones son inoportunas sobre todo por lo que de hecho pretenden, esto es, porque presumen el tipo de tratamiento de cada edificio, lo que no podemos considerar correcto. Si es “integral”, no se puede tocar; si es estructural, sólo pueden hacerse cosas que no afecten a sus rasgos fundamentales, etc. No debe de presumirse en absoluto lo que ha de hacerse con cada bien y no debe de existir, consecuentemente, la pretensión de un bien “integral”, esto es, intocable.

No hay nada intocable. Los antiguos Monumentos Nacionales, hoy BIC, son de conservación integral, podría decirse, pero no son intocables, como la práctica demuestra. Han sido muy tocados, y probablemente ha convenido y convenga que lo sean. Nada se para ni se congela en el tiempo, y si se pretende que sea así, el cambio aparecerá de todos modos, aunque por un lugar inesperado y probablemente negativo.

Los bienes patrimoniales pueden y deben ser alterados por diversos motivos, entre los que destaca el de su propia supervivencia. Muchos tendrán que ser modificados para ser útiles, para que puedan sobrevivir, o porque así se desea, pero sin que ello signifique que no pueda haber edificios modernos sin uso, pues podrían existir cuando conviniera, como ha ocurrido tantas veces con los del pasado.

Así, pues, considero que para los edificios patrimoniales modernos, como para los antiguos, la persecución de la fidelidad al original, secuela práctica de la conservación “integral”, es, por ejemplo, un espejismo a evitar por los equívocos que crea. La persecución ha de ser siempre otra: la de la obtención de la calidad arquitectónica, y de todo tipo, la más alta posible. No cabe descartar, pues, sino todo lo contrario, las intervenciones que aportan arquitecturas nuevas, como ocurrió en el pasado y como por fortuna sigue ocurriendo bastantes veces.

La calidad más alta posible y la solución a los problemas que el edificio plantee. Esto es, es en el propio edificio donde se deberán encontrar tanto los valores más altos que tiene, que podrán conservarse y potenciarse, como las carencias y problemas a eliminar. Todo ello sin fórmulas, ni recetas posibles, y con la necesidad de estudiar a fondo cada caso; es decir, en realidad, del mismo modo que si se tratara de edificios antiguos. Pues no se crea que porque sean modernos la cosa es distinta, y que podríamos hacer ahora como si fuéramos Viollet-le-Duc, pero con el racionalismo, en vez de con el gótico. Pues la tentación de todos con el moderno es la del “ripristino”, la de la recuperación perfecta del edificio primitivo, ya que podemos conocer exactamente como era, y lo estimamos así como mejor solución. Sin embargo, esta posición debe de afectar tan sólo a casos especiales y nunca convertirse en algo general. Que el tiempo ha pasado no puede ni olvidarse ni evitarse.

Pues el tiempo nos ha enseñado bien que debe de huirse de cualquier preferencia estilística, de cualquier sentimentalismo, incluso ideológico, si se quiere tratar con un mínimo de acierto a los edificios ya existentes. Así se ha de tener con el moderno la misma frialdad profesional y la misma lúcida pericia que son siempre necesarias para una actuación correcta y valiosa con los edificios del pasado.